

Cesión de datos a los representantes sindicales de los trabajadores - Año 2000

Se ha planteado reiteradamente por distintas Administraciones Públicas si es posible la cesión a los integrantes de la Junta de Personal de una relación de funcionarios, en la que se incluirán determinados datos de carácter personal referentes a los mismos.

Teniendo en cuenta lo indicado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000 de 30 de noviembre, analizada en otro lugar de esta memoria, la cesión de datos por parte de las Administraciones Públicas (salvo cuando el cesionario sea otra Administración y la transmisión se funde en el ejercicio de una misma competencia) se encuentra sometida al principio de reserva de Ley, por lo que es necesario delimitar si en este caso existe una Ley habilitante.

En este sentido, el artículo 9 de la Ley 9/1987, reguladora de los Órganos de Representación y Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas enumera las funciones atribuidas a las Juntas de Personal, incluyéndose entre las mismas, no sólo la recepción de información, sino también "vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes" (artículo 9.6) y "vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo" (artículo 9.7).

Por su parte, el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece el carácter público de las Relaciones de Puestos de Trabajo, si bien las mismas, no contendrán, a la vista del contenido exigido por el artículo 15.1 b), los datos del personal concreto que ocupe un determinado puesto de trabajo, sino exclusivamente las características de cada uno de los puestos de trabajo existentes en cada dependencia Administrativa, siendo los datos personales referidos a cada funcionario público, de acceso restringido a éste último, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.5, párrafo segundo de la propia Ley 30/1984.

Se hace preciso, en consecuencia, coherente las atribuciones conferidas a las Juntas de Personal en la Ley 9/1987 con la protección otorgada a los datos automatizados de carácter personal, regulada en la Ley Orgánica 15/1999, y con los límites previstos en el artículo 21 para la posible cesión de esos datos.

Pues bien, según el criterio de la Agencia la función de vigilancia y protección de las condiciones de trabajo, atribuida a las Juntas de Personal por la Ley 9/1987 puede llevarse a adecuado desarrollo sin necesidad de proceder a una cesión masiva de los datos referentes al personal que presta sus servicios en el Órgano o Dependencia correspondiente. Sólo en el supuesto en que la vigilancia o control se refieran a un sujeto concreto, que haya planteado la correspondiente queja ante la Junta de Personal, será posible la cesión del dato específico de dicha persona

